

Albert Recio Andreu

Capitalismo etéreo: de subcontratas, fondos financieros y autoritarismo tecnocrático

Cuadernos de estancamiento: 4

El capitalismo se parece cada vez más a la imagen de Dios habitual en las religiones monoteístas. Un ser lejano, inasible, irresponsable, incorporeal, que se manifiesta a través de oráculos, al que no se le pueden pedir explicaciones... Y, como ocurre al menos con el catolicismo, si las cosas nos van mal, si nos equivocamos, es culpa de nuestra alma mortal, no de sus fallos de diseño. Sin duda, el capitalismo real es otra cosa, personas concretas que se enriquecen, que adoptan decisiones, que influyen sobre las condiciones de vida de millones de personas, cuyo modelo organizativo y comunicativo actual está diseñado para que ese poder y ese comportamiento aparezcan diluidos bajo la forma inmaterial de “los mercados”, “los reguladores globales”.

Los acontecimientos recientes nos dan nuevas pistas sobre cómo se ha producido este “endiosamiento” (en el sentido de la opacidad) del capital y nos ayudan a entender mejor cuales son sus mecanismos de poder.

Subcontratas

La exitosa huelga de las basuras de Madrid ha sido, más allá de la merecida victoria obrera, una buena lección para mucha gente. De una parte sobre el comportamiento de estas empresas, verdaderos tahúres que “compiten” por mercados cautivos con cartas marcadas: rebajan precios que después acaban traduciendo en una rebaja de condiciones laborales y (posteriormente) en un deterioro del propio servicio. Algo que ya se ha experimentado en otros muchos casos y que constituye un mecanismo que garantiza beneficios a costa de generar costes a la sociedad: a la propia plantilla y a los receptores del servicio. De otra, sobre el papel de la alcaldía, responsable de subcontratar sin control un servicio público y después desentenderse de las consecuencias laborales que genera el contrato. Aunque Ana Botella es una muestra visible de irresponsabilidad social, con matices propios de cada cual, cosas parecidas se pueden oír de la mayor parte de nuestros políticos (yo se las oí hace cuatro meses al alcalde de Barcelona, una persona más accesible que su colega madrileña, refiriéndose a otro conflicto de otra subcontrata municipal).

La subcontratación no es sólo el producto de las políticas privatizadoras del sector público sino que constituye una fórmula creciente en el funcionamiento del mundo empresarial. La justificación de su proliferación descansa en una particular lectura de la división del trabajo: la complejidad de las actividades productivas es tal que cuanto más especializada es una empresa mejor conocimiento tendrá de su parcela y por tanto más productiva será. La subcontratación permite a las empresas concentrarse en aquellas facetas donde son más productivas y dejar que cada especialista se ocupe de su tarea. Esto, que como principio teórico puede resultar creíble, en la práctica es mucho más oscuro y, junto a razones de eficiencia, se detectan fácilmente otras que o tienen poco que ver con ésta o que directamente cuestionan su verdad.

Si la eficiencia técnica fuera la razón fundamental del crecimiento de las cadenas de subcontratación lo que encontraríamos es la proliferación de empresas especializadas negociando de tú a tú entre sí y generando entre todas una actividad productiva compleja. En la práctica, la realidad es bastante distinta (y parto del conocimiento de investigaciones propias o ajenas): la subcontratación se traduce en la formación de una estructura empresarial jerarquizada, en la que las rentas empresariales son más importantes cuanto más alto se está en la jerarquía del proceso. La subcontratación es tanto más habitual cuanto más intensiva en trabajo humano es una actividad; y también los salarios y las condiciones de trabajo son peores cuanto más baja está la actividad en la jerarquía organizativa, cuanto mayor es la consideración de “auxiliar” de la actividad que se realiza (la limpieza suele ocupar en muchos casos el nivel más bajo de ingresos y consideración).

La vida laboral de los empleados en subcontratas suele estar marcada por una doble disciplina: el poder de su empresario directo y el poder del cliente. La subcontratación no siempre lleva a la eficiencia. Cuando lo que requiere el subcontratante es un servicio a medida, complejo a menudo, se encuentra con que el subcontratador le ofrece un servicio estándar que casa mal con sus necesidades y es fuente de numerosos problemas de ajuste (un ejemplo de este tipo lo suele proporcionar la externalización de servicios informáticos). En cambio lo que siempre le da una enorme ventaja al subcontratante es la elusión de buena parte de sus responsabilidades laborales y sociales, como ponen en evidencia los numerosos casos de las grandes multinacionales pescadas *in fraganti* (algunas de tan glamurosas como Apple o Nike) con explotación brutal en las plantas de sus proveedores (lo que generalmente da pie a algún ejercicio de construcción, alguna operación publicitaria y un cambio de proveedor para salir airoso del tema).

Pero aún resulta más patente que la eficiencia técnica y la especialización tienen poco que ver con el meollo del asunto cuando se analiza a qué se dedican las empresas de subcontratas públicas y las llamadas “empresas de servicios” que actúan en el sector privado. Estas últimas lo que hacen es simplemente cubrir parte de la actividad de trabajo manual en todo tipo de empresas industriales; si son especialistas de algo es de gestionar mano de obra manual barata. En el caso de las subcontratas públicas, la cosa es tanto más escandalosa puesto que son las mismas empresas que tradicionalmente han vivido de los contratos de obra pública las que han creado filiales de servicios que se ocupan de todo aquello que el sector público externaliza. No hay más que ver quién está detrás del conflicto de Madrid: FCC (Esther Koplowitz y familia), OHL (el grupo industrial del ex Ministro tardofranquista Villar Mir) y Sacyr, empresa creada por antiguos directivos de Ferrovial bien relacionados con Felipe González y que tras diversos avatares ahora tiene como principal accionista a la familia Carceller (descendiente del ministro de Industria de Franco durante la guerra civil, propietaria del grupo petrolífero Disa, principal accionista de la cervecera Damm y ahora inmersa en un intrincado proceso por fraude fiscal), a quienes se sumaba la propia Ferrovial (de la familia Del Pino, cuyo fundador fue un alto directivo del Ministerio de Obras Públicas durante el franquismo). Si ampliamos el radio de visión más allá de las basuras de Madrid, nos encontramos con que de forma sistemática aparecen estas mismas empresas, el resto de grandes constructoras (ACS, Acciona...) y alguna empresa más (Eulen) entre las tradicionales adjudicatarias de gran parte de servicios externalizados. Otra forma de seguir sacando dinero de las arcas públicas en un modelo más estable que el de las obras. Hace pocas semanas los tribunales impidieron al Ayuntamiento de Guadalajara sacar a

concurso la externalización de todas las actividades públicas por cincuenta años, en un solo paquete, en una muestra clara que lo que prima no es la especialización y el conocimiento, sino la entrega de lo público a una casta de empresas rentistas. Seguro que el intento no es el único.

Más allá de externalizar riesgos, fragmentar la acción colectiva, discriminar precios y/o ceder rentas, la mayor parte de políticas externalizadoras tienen otro aspecto común: el desprecio por el trabajo directo y la presunción de la excelencia directiva. Los empresarios y políticos que externalizan actividades lo hacen en parte convencidos de lo trivial de las tareas subcontratadas, de la no necesidad de mimarlas, supervisarlas, entenderlas. De que el trabajo básico es cosa de subpersonas y que en cambio lo sublime es simplemente dirigir. Toda la expansión de la externalización está atravesada por este desprecio del trabajo común, por esta ignorancia de la importancia de la cooperación. Forma parte del proceso de deslegitimación de los derechos de la gente común, de la justificación del aumento de las desigualdades, de la despreocupación por los resultados reales de la actividad laboral y de la obsesión por el excedente monetario. Capitalismo especulativo, depredador, ignorante en estado puro.

Fondos financieros

Otro rasgo común de los tiempos es la creciente —el proceso no es nuevo pero diría que tras la crisis se ha acelerado— pérdida de identidad de la propiedad capitalista y su sustitución por empresas que tienen en común su opacidad societaria, que se presentan más como organizaciones, fondos de inversiones, empresas de capital riesgo, etc. En el capitalismo decimonónico cada empresa tenía su propietario claramente definido. En el período del capitalismo financiero aún persistían líneas de propiedad patentes, el capital financiero se asociaba a bancos concretos, o muchas grandes empresas industriales estaban bajo control de algún propietario o cuando menos de una élite directiva arraigada en la empresa. Ahora, de forma creciente, las empresas pasan a manos de fondos financieros que gestionan capitales de orígenes diversos, que tienen como señuelos a unos pocos directivos. A la hora de exigir responsabilidades, se hace difícil detectar todas sus líneas de poder. Su enfoque de funcionamiento es mucho más voraz que en el capitalismo tradicional, puesto que se basa en la búsqueda de rentabilidad financiera a corto plazo. Sus responsabilidades más difíciles de detectar puesto que utilizan un entramado de formas societarias donde casi nunca queda claro quién es quién, donde la extracción de excedente de una de sus empresas participadas se camufla como devolución de préstamos o pago por servicios, donde la maraña societaria ayuda a eludir el pago de impuestos. Subcontratas y empresas financieras constituyen una estructura pensada para aumentar la extracción de plusvalía, para eludir responsabilidades.

Por muy escandalosa que sea la sentencia del *Prestige*, lo peor de todo es que los responsables primarios del suceso (los que fletaron un buque en mal estado) ni siquiera se sentaron en el banquillo. Lo que se descubre en muchas empresas en crisis es que antes han sido descapitalizadas por sus fondos propietarios, como es el caso de Panrico. Hoy asistimos en nuestro país a un proceso acelerado de cesión a este tipo de empresas de gran parte de los fondos inmobiliarios y de créditos dudosos de los grandes grupos bancarios. Ellos son los que van a hacer el trabajo sucio de acosar a los deudores, a los hipotecados, y dejar al margen la imagen de una banca que había sido golpeada por las movidas de la PAH y de las preferentes.

Cuando escribo estas líneas, en mi barrio hay una reunión para ver como nos defendemos de

una de estas operaciones especulativas: una empresa propiedad de un ente territorial (un *consell* comarcal) ha vendido a uno de estos fondos (Azora) casi trescientas viviendas públicas. Es la misma empresa que ha comprado en Madrid tres mil viviendas a Imvisa. La empresa es un simple gestor de fondos financieros (reconoce en su web que el 60% del capital está en manos de entidades financieras y fondos de pensiones) dirigida por dos ex altos directivos del área financiera del Santander y presidida por el ex presidente de Goldman Sachs España, banco que también está implicado en la operación madrileña. ¿Cuál será su gestión? ¿A quién deberemos dirigirnos si se producen los más que probables desalojos de morosos (basta un mes de retraso con la nueva ley) o el gestor no cumple su tarea de mantenimiento de los bloques?

Detrás de estas empresas-pantalla están los ricos, los grandes capitalistas y las entidades financieras, pero este modelo organizativo hace más difícil su control social, diluye responsabilidades, mixtifica la relación que existe entre la propiedad capitalista y los efectos sociales de su gestión. Con estos mecanismos de delegación-camouflage la verdadera clase dominante toma cada vez más la forma de una casta de parasitarios-rentistas.

Autoritarismo tecnocrático

La tercera pata del proceso de liquefacción del capital pasa por presentar sus intereses como meras opciones técnicas. Un proceso que tiene el doble efecto de debilitar las críticas y trasladar el enfrentamiento del campo capital-trabajo al de la relación ciudadano/súbdito-élite política. La forma como se ejerce esta traslación es variada. Las políticas de puertas giratorias son quizás su versión más evidente, pero el proceso se encuentra mucho más sofisticado, por ejemplo, en el control que ejercen los grandes intereses económicos en las instituciones reguladoras (bancos centrales o reguladores sectoriales) o en los procesos de elaboración de propuestas “técnicas”, como es el caso del comité de expertos que ha legitimado el asalto a las pensiones.

Este desvío del poder desde la política a los expertos y reguladores tiene dos ventajas claras para el conflicto social. La una, que cuanto más méritos profesionales y académicos presentan esos “expertos” más difícil es que sus críticos obtengan un mínimo de credibilidad social. Su legitimidad se ha cocido a fuego lento, en los abruptos mecanismos de control que pueden detectarse en algunos ámbitos académicos (especialmente en el de la economía) o en el simple hecho de que tienen un largo historial de conocimiento del tema (por ejemplo alguno de los participantes en la comisión de expertos de las pensiones lleva mucho tiempo publicando la misma matraca, aunque en algunos casos sus previsiones —demográficas y financieras— fueran desmentidas por la realidad. La condición de “especialista” en el tema es en cambio vedada a gente que ha realizado trabajos más sustanciosos pero que no forma parte del punto de vista que interesa a las élites). La otra ventaja es que la ira de la gente contra las agresiones cotidianas acaba dirigiéndose hacia los políticos que nombran y acatan esas propuestas expertas, lo que deja fuera de plano el papel que tienen los principales beneficiarios de las mismas.

Es evidente que para que estas políticas sean factibles se requiere la cooperación activa de académicos y técnicos. Y para ello funcionan los mecanismos de adoctrinamiento, promoción, adulación (y marginación de los disidentes) detectables en la mayor parte de espacios de poder. El camouflage del capital requiere aliados y cómplices. Y por ello el análisis de las formas de dominación no puede reducirse a la simple constatación del dominio capitalista sino que debe contemplar todos los procesos sociales que ayudan a generar esta masa social de legitimadores

del sistema.

El autoritarismo tecnocrático tiene su cara abrupta en el mero autoritarismo político. Cuando las masas incultas (y algunos demagogos) se rebelan contra sus asépticos planes no queda otra que hacerles entrar el bien por la vía del palo. Por ello cada vez la deriva del autoritarismo tecnocrático va tomando la forma de un sistema político meramente autoritario. La nueva Ley de Seguridad Ciudadana (seguro que elaborada por insignes juristas para que pase todos los filtros) es la mera prolongación de la lógica de la reforma laboral (que a su vez hilvanaron insignes especialistas en derecho laboral, uno de ellos presidente del Tribunal Constitucional) y de la nueva ley de pensiones (elaborada por insignes sociólogos y economistas académicos).

El que el gran capital trate de ser etéreo no impide que lo podamos ver. Simplemente se requiere de un mayor esfuerzo colectivo para conseguir que todo el mundo vea al rey desnudo. Y para empezar a tomar medidas de recuperación democrática y de mayor transparencia social, para atacar directamente los intereses de esta casta de rentistas parásitos en que han devenido las élites capitalistas locales y mundiales.